

El retorno de la historia

GUSTAVO FERNÁNDEZ

Ex Ministro de Asuntos Exteriores de Bolivia

Como tantas otras veces, el siglo se inicia para América del Sur, entre paradojas y contrastes.

El escenario global está cargado de malos presagios. Los atentados del once de septiembre, la sensación de vulnerabilidad ante la invisible amenaza terrorista, la resistida ocupación de Irak, la política de cero tolerancia que prioriza la política de seguridad por encima de cualquier otra, las graves diferencias estratégicas entre Estados Unidos y la “vieja Europa”, han creado un ambiente de pesimismo e incertidumbre, que repercute negativamente en la economía global.

Japón no sale de años de estancamiento, asoma el riesgo de deflación en la economía norteamericana, aumenta el desempleo, se debilita la confianza de los consumidores y el sentimiento de inseguridad domina el comportamiento de los actores económicos. Los centros financieros acompañan ese proceso con preocupación creciente. Se desacelera el movimiento transfronterizo de capitales, bienes y servicios. Los inversionistas europeos y norteamericanos repatrian capitales y venden las acciones que no son domésticas. El auge de fusiones y adquisiciones a nivel global se desvanece. El temor a atentados terroristas obliga a las empresas a modificar sus estrategias internacionales y a buscar refugio en mercado conocido. El proceso de globalización encuentra más resistencia de la esperada y pierde legitimidad e impulso.

En América Latina, agitación social, conflictos políticos, crisis económica, dejan testimonio de un extendido rechazo al modelo económico y de descontento con el funcionamiento del sistema democrático.

Democracia, modernización, desarrollo tecnológico, vitalidad cultural, conviven, tropiezan y chocan cada día con la concentración de la riqueza, la exclusión social, la solapada discriminación étnica, el atraso acumulado, la dependencia de los factores externos, la inserción marginal en el sistema internacional.

No es hora de estabilidad, ni podría serlo. En esta parte del mundo, la historia no terminó el día que cayó el Muro de Berlín. Ese fue el momento, por el contrario, del retorno de la historia. De la misma historia. Pero, también, el comienzo de otra.

A lo largo del continente colisionan las placas tectónicas de la globalización y las fuerzas del antiguo orden social. Es tiempo de cambio, de confrontación entre la sociedad tradicional y la nueva, en una dimensión total, sólo comparable a la que desencadenó la primera revolución industrial.

Ese descontento con la globalización y el rechazo abierto a la privatización de las empresas estatales, especialmente las de servicios públicos, ya produjo sus primeras consecuencias políticas. Elecciones sucesivas en Ecuador, Brasil, Paraguay y Argentina, colocaron al frente de los Gobiernos proyectos políticos de izquierda o centro izquierda, mucho menos complacientes con el Consenso de Washington que sus predecesores. En Bolivia, marcaron el brote de nuevas organizaciones populares.

Contrariamente a lo que se esperaba, sin embargo, ese proceso de cambio político no se tradujo en caos económico, subversión social o derrumbe institucional.

En la costa del Atlántico, se pasó del temor a la crisis sistémica a la afirmación del cambio político. Lula se convirtió en factor continental de estabilidad económica y política, en la medida en que la apertura de las instituciones democráticas a sectores sociales largamente postergados, complementó la seriedad y continuidad de la política económica. La gente comenzó a creer que su descontento, traducido en votos, podía encaminar en democracia el cambio tanto tiempo esperado.

Cuando todo parecía indicar que los feudos peronistas de la Argentina –causantes en buena medida del colapso económico y de la crisis social– sobrevivirían a las urnas, Kirchner llegó con vientos de cambio y renovación política. Superada la fase más aguda de la emergencia, la economía comenzó a reaccionar con mayor rapidez que la esperada, pese –o, tal vez, gracias a– a la actitud prescindente y hostil del Fondo Monetario Internacional. La Argentina se encuentra ahora en mejor posición negociadora que la que tuvo antes, con un Gobierno legítimo, con sólido respaldo popular y con seriedad y disciplina fiscal ya demostradas, frente a un Fondo Monetario Internacional (FMI) desmoralizado justamente por los errores que cometió en ese país, en el apoyo a políticas y personajes corruptos y desacreditados. Kirchner, tomó además, sin vacilaciones, la opción estratégica de la alianza con Brasil y el Mercado Co-

mún del Sur (MERCOSUR), en el lugar que antes ocupó la “alianza carnal” con los Estados Unidos. Por el mismo camino parece andar el nuevo Gobierno del Paraguay y debiera esperarse algo semejante de los próximos comicios en el Uruguay.

De esa manera, bajo el liderato del Brasil, el MERCOSUR, al que se debe sumar Chile, retoma una posición de vanguardia, con dos características fundamentales. De un lado, afirmación del cambio, la participación popular y la renovación política en el marco del sistema democrático. De otro, reconocimiento de la necesidad de actuar con seriedad en el plano de las políticas macroeconómicas, sin caer en los muchos defectos del neoliberalismo, y la convicción de que la integración regional es el camino para alcanzar una integración negociada en la economía mundial, en términos compatibles con los intereses y potencial del Continente.

En los hechos, la transformación descrita disipa la hipótesis de la conformación de un eje integrado por Chávez, Lucio Gutiérrez y Lula, aliado natural de Cuba (y de Evo Morales), con una agenda que colocara los planteos de la confrontación interna y lucha antiglobalizadora y antiimperialista, por delante de las exigencias de modernización, inclusión social e integración regional.

La situación no es la misma en la vertiente andina.

VENEZUELA

En una posición geopolítica estratégica, poseedora de las más importantes reservas de hidrocarburos del Hemisferio, Venezuela fue, por mucho tiempo, el modelo de la democracia latinoamericana. Con un sistema fundado en la alternabilidad de dos partidos de centro, uno a la izquierda, socialdemócrata y otro a la derecha, demócrata cristiano, garantizó la estabilidad de las instituciones democráticas por cerca de cuarenta años. Los ingresos de las exportaciones de petróleo la mantuvieron a cubierto de las crisis que estremecían periódicamente a los otros países de la región. Con una deuda externa pequeña y enormes ingresos fiscales, su economía creció de manera sostenida y sus Gobiernos pudieron enfrentar con éxito el desafío de la ola expansiva de la revolución cubana.

El impacto de la globalización interrumpió bruscamente ese aparente sosiego. La apertura comercial y financiera y el intento de *sincera*r la economía, eliminando subsidios y apoyos estatales —medidas infortunadamente contemporáneas de una declinación sostenida del precio del petróleo— produjeron primero un levantamiento popular, conocido como el *caracazo*, y un poco más tarde un golpe militar encabezado por un coronel hasta entonces desconocido. El sistema polí-

tico tradicional intentó, penosamente, reponerse de esas pruebas, pero estaba herido de muerte y la renta petrolera ya no podía venir en su ayuda. Por cierto, la enemistad bíblica entre los viejos líderes de los dos partidos y la virtual imposibilidad de renovar esas estructuras, aceleraron su descomposición y crearon las condiciones perfectas para un proceso de cambio mucho más profundo.

De esa manera llegó al poder, por la vía electoral, el mismo Coronel que había explorado antes el atajo del golpe militar. Su lenguaje corporal e ideológico evoca, de forma espontánea o calculada, el que empleaba, cincuenta años atrás, el General Perón, en el otro extremo del Continente. Con todas las diferencias que separan, a medio siglo de distancia, el trópico caribeño de sociedades tan distantes como las mestizas del mundo propiamente andino —en Bolivia, Perú, Ecuador— y las europeizantes del Cono Sur, la estructura política que intenta construir Chávez recuerda la que promovió las reformas de los movimientos nacionalistas latinoamericanos —con el poder concentrado en el caudillo y sustentado en torno a la alianza de militares y sectores populares—. Los adversarios son los de antes: el imperialismo y sus agentes locales. Su programa económico es el del capitalismo de Estado y la economía mixta, con las empresas públicas firmemente colocadas en el centro del escenario. A contrapelo de la ortodoxia globalizadora, procura crear y fortalecer el mercado nacional, al tiempo que trata con recelo la apertura financiera y comercial. En su lugar propone la integración latinoamericana como la forma natural de ampliar el mercado nacional y de sentar las bases del desarrollo industrial. Chávez no es enemigo de Estados Unidos, pero se siente más amigo de Cuba. Para los analistas del Pentágono y de Wall Street eso hace toda la diferencia.

Por esas curiosas ironías de la historia, su plataforma económica y su práctica política, que descansan en la renta petrolera y en el clientelismo, eran las mismas que sustentaron la acción de los partidos que se había propuesto destruir. En esa perspectiva, el *chavismo* se asemejaba más a un movimiento restaurador que a uno revolucionario, hasta que los últimos acontecimientos radicalizaron el cuadro. Ahora ya dice, con todas sus palabras “aquí estamos definiendo y avanzando ya en un proyecto alternativo al plan neoliberal por el que nos quisieron meter a todos como en el tren de la muerte. Es la agenda de la vida, el camino alternativo, así que a luchar y a triunfar. Esa es la consigna”.

En los primeros años de su turbulento mandato se cuidó de dejar en claro que mantendría la calidad de socio estratégico de los Estados Unidos, en el abastecimiento de petróleo, y procuró no afectar al sector privado venezolano, con cuyo apoyo había llegado al gobierno. Focalizó su acción en el cambio de la estructura institucional y política del Estado venezolano, hasta concentrar todas las riendas del poder en sus manos.

El entonces Embajador de Estados Unidos y ahora asesor de Condoleza Rice en asuntos latinoamericanos, John Maisto, sostenía que había que ver lo que Chávez hacía, en lugar de preocuparse por que lo dijera. Las palabras traen consecuencias, sin embargo, y bien pronto se notó que la retórica jacobina había abierto un enorme foso en la sociedad venezolana, que dejaba de un lado a los ricos y blancos y del otro a los negros y pobres. Los empresarios y las clases medias asumieron el verbo (y la preparación paramilitar de círculos bolivarianos en los cinturones pobres de Caracas) como una amenaza real y se pusieron a la tarea de derrocar a Chávez, si fuera posible por la vía democrática, pero si fuera necesario por la que se presentara. Los medios de comunicación ocuparon el lugar que habían dejado vacante Acción Democrática (AD) y el Partido Social Cristiano (COPEI) y encabezaron la acción. Contra las cuerdas, como Muhammad Ali, Chávez aguantó y aguantó todo. Las críticas de la Iglesia, un golpe de estado, manifestaciones y movilizaciones sociales gigantescas y un paro general que duró más de tres meses. Al final, ganó esta vuelta por cansancio. Sintiendo victorioso desahució la ayuda de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de los países amigos y tomó la ofensiva contra la empresa venezolana.

Pero, como Pirro, puede decir “una victoria más de éstas y estoy perdido”. Encontró escombros en lo que había sido el campo de batalla. La sociedad venezolana está irreparablemente dividida y las bases de su economía gravemente dañadas. Empresas grandes, medianas y pequeñas están quebradas. La desocupación ha crecido. Escasean combustible, alimentos e insumos. La industria petrolera trabaja a uno o dos tercios de su capacidad. El PIB cayó en 10% en el 2002 y se espera una cifra semejante o mayor para este año. La lógica indica que debe aprovechar el momento para imponer una economía de guerra, todavía más centralizada, que aplique mecanismos de control de precios, subvenciones, tipos de cambio múltiples, todos dependientes del poder político.

La democracia venezolana se compró con petróleo, en la frase brutal de Carlos Blanco. Podría decirse que la *revolución chapista*, la que ahora viene, se financiará con la misma moneda. Hasta donde pueda.

COLOMBIA

En el vecindario inmediato de Venezuela, los partidos Liberal y Conservador de Colombia, ambos de extremo centro, fueron también capaces de sostener otras cuatro décadas de estabilidad económica y política. Luego de la explosión de cólera popular que desató el asesinato de Gaitán en 1948, que se registra en los libros de historia como el *bogotazo*, fueron mas allá, inclusive y en 1957, al término del gobierno militar de Rojas Pinilla, establecieron el Frente Nacional, por el que compartían todos los niveles del poder y con el que ase-

guraban la gobernabilidad del sistema ...y la preservación de las estructuras económicas y sociales. En el camino, el sistema se tornó oligárquico, se cerró sobre sí mismo. La expresión *pais político*, con que se lo conoce, para diferenciarlo del *pais nacional*, en el que habitan el resto de los colombianos, lo dice todo.

De esa forma, con la flexibilidad e inteligencia de su élite política, la oligarquía colombiana resistió o desvió los vientos de cambio de los movimientos nacionalistas y populares que recorrían el resto del Continente. Pero, en cambio, no pudo evitar la *violencia*. La guerrilla colombiana, que lleva tantos años como su democracia, al punto que parece uno de sus subproductos, nació como consecuencia de un acontecimiento doméstico —la confrontación entre liberales y conservadores— pero se adaptó fácilmente al contexto de la guerra fría y utilizó el financiamiento y las categorías filosóficas del campo socialista para continuar la lucha. Cuando cayó el Muro de Berlín encontró en el narcotráfico el mecanismo de su persistencia. Garantizó su sostenibilidad, como hoy se suele decir. Lo que no cambió en todo ese largo proceso, fue su propia naturaleza. La característica de guerrilla rural, respuesta a la inmutabilidad de las estructuras económicas y sociales dominadas por el mundo urbano.

CON ALGÚN RETRASO, ESA REPÚBLICA OLIGÁRQUICA HIZO CRISIS, FINALMENTE

Después de años de estabilidad —que tanto la diferenciaron del resto de América Latina— en el momento en que el Gobierno de César Gaviria decidiera iniciar el proceso de reforma estructural de la economía, para hacerla más competitiva en el mundo globalizado, quedaron en descubierto fisuras pronunciadas en su estructura productiva y las dolencias clásicas de la economía regional —gasto público excesivo, déficit fiscal, inflación, crisis del sector externo, flujos migratorios de capital y cerebros— se instalaron en el cuerpo social de Colombia. Cayó el producto interno y el ingreso por habitante hasta que el alza de precio del petróleo permitió reordenar las cuentas y alejar el peligro.

El narcotráfico cambió todo el escenario. El contrabando de marihuana había sido siempre parte del paisaje del Caribe colombiano, especialmente en Barranquilla. Pero era una actividad relativamente menor y hasta cierto punto tolerable. La cocaína y la heroína resultaron, sin embargo, dos animales diferentes. La industria se integró de arriba abajo. Comenzó con la administración de los circuitos de comercialización de droga peruana y boliviana en los mercados de Estados Unidos y se expandió progresivamente a la transformación de la pasta base en clorhidrato y, finalmente, a la producción de hoja de coca, como insumo primario, en territorio colombiano. La Drug Enforcement Administration (DEA) estima que Colombia produce cerca de 500 to-

neladas de cocaína al año, equivalentes al 90% de la oferta mundial y que las provincias de Caquetá y Putumayo abastecen dos tercios de esa producción. Con el respaldo de unas exportaciones anuales cercanas a los dos mil millones de dólares, los carteles de Medellín y Cali, tomaron tal poder que desafiaron abiertamente al poder constituido y alentaron la ilusión de un Estado controlado por las fuerzas de la droga. Esa parte de la historia terminó con la muerte de Alejandro Escobar y la prisión de los hermanos Ochoa.

Comenzó otra. La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) asumió la protección del negocio. Ofreció apoyo y soporte logístico a las docenas de pequeñas empresas que ocuparon el lugar dejado vacante por los grandes carteles y, de esa manera, aseguró un ingreso aproximado de un millón de dólares al día, que se suma a las recaudaciones provenientes de la extorsión a empresarios y agricultores ya la industria del secuestro. Con un ejército de 18.000 hombres en armas es una fuerza respetable. Ganaderos y empresarios de algunas regiones —muchos ligados al propio narcotráfico— decidieron confrontar ese poder con el suyo y organizaron grupos paramilitares, en vinculación estrecha con las Fuerzas Armadas, que tomaron vida propia una vez que se constituyeron en las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y resolvieron financiar sus actividades por el mismo procedimiento de la fuerza que pretendían combatir. La DEA describe a Castaño, jefe de las AUC, como un gran narcotraficante, por mérito propio.

La combinación de guerra interna, mala economía y esclerosis del sistema político, resultó literalmente letal. Guerrilla campesina, narcotráfico, terrorismo de derecha, desgarran el escenario político y social de Colombia. Por lo menos 35.000 personas han muerto en el conflicto armado en la década pasada. Colombia es el escenario de una peores crisis de desplazamiento forzado en el mundo, en escala semejante a las de Sudán y Angola. Aunque las estimaciones varían mucho, hay algunas que las sitúan en el orden de dos millones de colombianos —más o menos el 5% de la población—, obligados a dejar sus casas desde 1985. Adicionalmente, cerca de 800.000 colombianos, en su mayoría de clase media, han dejado su país. En la expresión de Pedro Medellín, el ciudadano convive con varias instituciones, varias Constituciones, varios Ejércitos. Los periodistas y diplomáticos apuntan, con cierta dosis de ironía, que los países vecinos limitan con las FARC, los paramilitares de Castaño y, en ciertos puntos, con el Gobierno de Colombia. Se requirió la garantía explícita de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los paramilitares para llevar a cabo la Copa América en 2000.

El Gobierno de Andrés Pastrana procuró encontrar una solución política por la vía del diálogo, con un fuerte respaldo de la opinión pública interna y la

simpatía de la comunidad internacional. En un gesto que pretendía tener valor simbólico pero que trajo consecuencias prácticas funestas, cedió el control de la zona de despeje de San Antonio del Caguán. Allí las FARC pretendieron ejercer —o ejercieron— autoridad estatal, extendieron alfombras rojas y tocaron el himno nacional para recibir a diplomáticos e inversionistas extranjeros, sin interrumpir el ritmo de sus acciones militares contra el Gobierno con el que dialogaban.

Todo eso terminó con las elecciones del 2002. Desencantado de las negociaciones de paz y de un diálogo sin futuro, el electorado extendió un mandato inequívoco al Presidente Alvaro Uribe, para enfrenar y acabar con la violencia, de izquierda y derecha. De esa manera, el país escaló la confrontación. Con el apoyo de Estados Unidos, los programas de erradicación forzosa de cocaes, por el procedimiento de fumigación, se intensificaron sustantivamente. La Agencia Central de Inteligencia (CIA) informó la última semana de febrero de 2003 que el cultivo de coca en Colombia cayó en 15% y que las exportaciones de cocaína desde ese país se redujeron en 350 toneladas métricas, equivalentes a un 35% del total de ventas de droga colombiana en el mercado mundial.

Las Fuerzas Armadas aumentaron su presión en las áreas rurales y las FARC trasladaron la guerrilla a las zonas urbanas, con atentados cuidadosamente planificados, que dejaron de ser ejercicios de propaganda para convertirse en instrumentos de una confrontación total.

George Bush ha comprometido su respaldo absoluto al Presidente Uribe. Cerca de 400 instructores militares norteamericanos se encuentran en territorio colombiano y los Estados Unidos han aprobado aproximadamente dos mil millones de dólares en ayuda desde 1999 (se planean mil millones adicionales en los próximos dos años), convirtiendo a Colombia en el mayor recipiente mundial de cooperación financiera estadounidense, después de Israel y Egipto. Los Estados Unidos han proporcionado 80 helicópteros de transporte, entrenamiento de una brigada antinarcóticos, preparación de pilotos y entrenamiento de una unidad de élite antiguerrillera. Pese a todo, Uribe no ha logrado convencer a Estados Unidos, hasta ahora, que la lucha en Colombia es parte de la guerra mundial contra el terrorismo, ya que, aunque tres agrupaciones colombianas están clasificadas como terroristas por los norteamericanos, ninguna ingresa en la categoría de “alcance global”.

Los gobiernos latinoamericanos no ocultan su preocupación creciente con el riesgo de internacionalización y militarización del conflicto, que alimenta la presencia inquietante de los Estados Unidos y la relación cada día más tensa con Venezuela, por la utilización de territorio venezolano como santuario de

los grupos guerrilleros, la notoria afinidad de los grupos bolivarianos con las FARC y los frecuentes ataques de Chávez a la oligarquía colombiana, que comenzó todo esto con “tres tiros a Jorge Eliécer Gaitán”, como afirmó en una declaración reciente.

Así están las cosas en el norte del subcontinente.

ECUADOR

A principios de los setenta, el Ecuador parecía al borde de una revolución nacional. El Gobierno de las Fuerzas Armadas, aliado con intelectuales de izquierda, se proponía dictar una ley de reforma agraria, semejante a las que en su momento aprobaron Bolivia y Perú, que destruyera la base de poder económico y político de la oligarquía terrateniente, en la costa y en la sierra. Entonces se descubrió petróleo y cambió todo. Los hidrocarburos financiaron la modernización de la infraestructura de energía y comunicaciones, facilitaron la integración del mercado nacional, alimentaron la expansión de la estructura productiva y, en esa medida, contribuyeron a la reducción de las tensiones sociales. Más tarde, los movimientos indígenas acomodaron sus reivindicaciones al espíritu de los tiempos. Su demanda ya no fue sólo de tierra, sino de ciudadanía. De participación política y de reconocimiento y respeto de su identidad cultural. Pero, en todo caso, salieron a las calles.

El Estado ecuatoriano se sostenía en un acuerdo no escrito. El poder económico radicaba en la costa, centro de producción de banano y café. El poder político, en cambio, se asentaba en Quito, en la sierra, en la que vivía la mayoría de la población, especialmente la indígena. El control estatal de la economía petrolera —cuyos valores superaron los ingresos de las exportaciones agrícolas tradicionales— alteraron ese equilibrio. La Sierra sumó musculatura financiera a su fortaleza política. Pero también ocurrió otra cosa. Los partidos políticos comenzaron a administrar —y vivir— de la renta petrolera, repitiendo el esquema clientelista y excluyente de Venezuela. Por cierto, no se trataba de dos partidos, como en Venezuela y Colombia, sino de cuatro. Dos en la Sierra y dos en la Costa.

En ese cuadro, al que se sumaron la caída de precios del banano y el café, el Fenómeno del Niño y la confrontación armada con el Perú, se intentó llevar adelante la reforma estructural. Reducir el gasto público, controlar la inflación, eliminar subsidios y precios políticos, privatizar los servicios públicos (nadie se atrevió a plantear la privatización de la empresa petrolera estatal). Fue mucho para una sociedad que no se sentía al borde del abismo, como sí había ocurrido en los otros países en los que se aplicó el tratamiento de *shock*. Su situación no era la de Argentina, Chile, Perú o Bolivia.

Así, el remedio fue peor que la enfermedad. La sociedad resistió el cambio, pero ya no pudo volver atrás. Se quedó a medio camino entre la estructura proteccionista de economía mixta y la apertura comercial y financiera y la privatización, que propugnan el Consenso de Washington y la comunidad financiera internacional. Las medidas de ajuste, con las que se intentaba paliar la extrema debilidad del sistema productivo y financiero, no lograron su objetivo y, por el contrario, encendieron la mecha de un levantamiento popular —liderado por los movimientos indígenas— que llegó a amenazar la propia integridad del Estado nacional, por el resurgimiento de las tensiones tradicionales entre Sierra y Costa, entre Quito y Guayaquil. La conmoción social se llevó por delante la estructura institucional y política del Ecuador, que ya se encontraba bastante debilitada por la corrupción del aparato estatal, el rechazo de la ciudadanía y el encarnizado enfrentamiento de los dirigentes de los principales partidos.

El incremento inesperado de los precios del petróleo y la medida heroica de la dolarización, contuvieron el colapso, por lo menos temporalmente, en el borde mismo del abismo, luego de que se produjera una devaluación del setenta por ciento y de que se desplomara el sistema bancario. Se derrocaron dos Presidentes, aunque se hizo todo lo posible para cuidar las apariencias. Pero el andamiaje democrático ya estaba severamente dañado. Las Fuerzas Armadas, prestigiadas por la confrontación bélica con Perú, asumieron la función de árbitro en el sistema político. En realidad todo ese proceso no culminó en un golpe militar clásico solo por el rechazo absoluto de esa posibilidad por los Estados Unidos y la comunidad (financiera y política) internacional.

Lentamente, se restableció la estabilidad financiera y política. Sin embargo, tal como lo predijeron los expertos, la dolarización se convirtió en un zapato chino, en la medida en que redujo la competitividad de sus exportaciones. En cierta manera, la relación comercial con Colombia, su vecino y uno de sus principales socios, recuerda la que tuvo Argentina con Brasil, por el sistema de cambio fijo, antes de la declaratoria de moratoria de la deuda externa. Y los riesgos son semejantes, aunque menores y relativamente más distantes por la importancia del petróleo en su comercio exterior.

El Presidente Noboa terminó su mandato y presidió elecciones impecables, en las que triunfó Lucio Gutiérrez —el mismo Coronel que encabezara el motín contra Mahuad— con el apoyo del Movimiento Indígena Pachakuti, con un leve margen en la primera vuelta y uno mucho más amplio en la segunda. No obstante, como tantos otros mandatarios ecuatorianos, quedó prisionero del sistema constitucional, que lo obliga a gobernar con minoría parlamentaria. Contra muchas de las predicciones iniciales, en los primeros días de su man-

dato, el Presidente Gutiérrez tomó medidas para restablecer el equilibrio fiscal, concluyó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y reafirmó la relación de su Gobierno con los Estados Unidos. De esa forma, marcó distancias, de entrada, con Chávez en Venezuela.

No obstante, persisten las limitaciones principales del sistema ecuatoriano. Un mecanismo cambiado rígido, que afecta toda la estructura económica. Un Poder Ejecutivo con mayoría en la oposición parlamentaria y capacidad de acción política muy reducida. Y el riesgo constante del desborde del narcotráfico y la guerrilla colombiana en su territorio.

PERÚ

Al finalizar la década de los ochenta, el gobierno había cedido o abandonado el control de más de dos tercios del territorio peruano; Sendero Luminoso cerraba el cerco sobre Lima y era real la amenaza de que tomara el centro del poder político; el proceso inflacionario, con una tasa superior a los siete mil por ciento anual, estaba fuera de control; la deuda externa consumía cerca de la mitad de los ingresos de exportación y el narcotráfico establecía sus reales en la mayor superficie de cultivo de coca de los países andinos. Era claro que la política de moratoria de la deuda externa, estímulo de la demanda interna y la represión del narcotráfico y la guerrilla, ensayada por el Gobierno de Alan García, no había alcanzado sus objetivos.

El descontento de la ciudadanía se materializó en las elecciones generales de 1990. Las ganó un candidato surgido de la nada que, en la primera etapa de su gobierno, aplicó un exitoso y brutal tratamiento de *shock* para recuperar el control de la economía; redujo substantivamente la superficie de cultivo de hoja de coca y logró descabezar la estructura de Sendero Luminoso y del terrorismo peruano en las mismas puertas de la capital. En ese período, la economía peruana registró ritmos excepcionales de crecimiento, con tasas próximas al siete por ciento, alimentadas por la notable recuperación de la economía regional luego de la depresión de los ochenta; mejores precios de materias primas; financiamiento e inversiones extranjeras atraídas por la privatización de importantes empresas públicas; sensación de euforia por la victoria del Estado sobre el terrorismo y optimismo por la reinserción peruana en el sistema económico internacional.

Esa medalla tenía otra cara más siniestra, sin embargo. Para conseguir esos resultados —o al amparo de esas políticas— el poder se concentró en el Ejecutivo, con el argumento de que ésa era la única forma de actuar para vencer la herencia del estigmatizado sistema de partidos políticos. En ausencia de una base partidaria orgánica, Fujimori descansó en el soporte de las Fuerzas Armadas

y, muy especialmente, de los servicios de inteligencia. De esa manera, poco a poco, se estableció y consolidó un estado policial, que envileció prácticamente todos los niveles de la estructura estatal y social, por la vía de la intimidación y el chantaje.

La crisis financiera del Brasil y los mercados asiáticos, en 1998, unida a un Niño particularmente severo, provocó el desplome de los precios y de los ingresos de exportación de la minería y la pesca, produjo la ruptura de la cadena de pagos, tensó en extremo el sistema bancario y redujo el ritmo de crecimiento del producto. En ese escenario, el torpe intento de una tercera reelección, fracasó estrepitosamente y dejó al descubierto todas las debilidades y vicios de esa maquinaria política. La Organización de Estados Americanos, espoleada por los Estados Unidos, jugó un papel muy activo, aunque a momentos vacilante y contradictorio, en el proceso de concertación que condujo, finalmente, al restablecimiento del Estado de Derecho.

La estructura autoritaria implosionó, finalmente, corroída por dentro. Ese es el destino que espera —dice un *grafitti* en las calles de Santiago— a los movimientos políticos que no tienen proyecto histórico.

Así concluyó esa experiencia. Pero sus efectos se sentirán todavía durante algún tiempo. El nuevo liderazgo democrático, cuya autoridad moral se desgastó en una campaña electoral denigrante, tiene ante sí un desafío muy grande que, pese a todo, parece, comparativamente, menos complicado que el que se tuvo que enfrentar al principiar la década de los noventa. Luego de un comienzo vacilante, de un grave levantamiento social en Arequipa, que puso freno a un nuevo programa de privatizaciones, el Gobierno del Presidente Toledo comenzó la reconstrucción de las instituciones del Estado, la recomposición del sistema político y la reconducción del proceso económico. Ni el terrorismo ni la hiperinflación amenazan su gestión, por lo menos en el horizonte de mediano plazo.

No obstante, la debilidad de la coalición gobernante, pecado de nacimiento, quedó de manifiesto en el pobre resultado de las elecciones regionales de fines del año 2002, en las que triunfó ampliamente la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), que reafirmó de esa manera poder y autoridad en el sistema político peruano. Es cierto que ha manejado con prudencia esa nueva capacidad de acción, sin presionar demasiado al Gobierno. Pero la espada de Damocles está nuevamente pendiente en una de las habitaciones del Palacio Pizarro. Y en las cabeceras de selva, el movimiento cocalero ha vuelto a levantar cabeza, asumiendo más bien la forma sindical que caracteriza la presencia de los productores de coca en Bolivia, pero, en cualquier caso, abasteciendo de insumos al narcotráfico.

Y, otra vez, columnas de Sendero Luminoso escriben en las paredes que están listas para proseguir la acción que dejó inconclusa el “Presidente” Gonzalo.

Y más adelante, tiene ante sí una tarea de la que se habla poco, pero que resume el gran drama del Perú y otras naciones andinas. Eliminar la brecha cultural, ideológica, étnica, de ingreso, que separa la ciudad del campo, la Costa de la Sierra, Lima del resto del Perú.

BOLIVIA

El 6 de agosto de 1979, Hugo Bánzer Suárez cruzó el portal del Palacio Quemado con la medalla del Libertador y la banda tricolor cruzada en el pecho, investido en el Congreso de la República como Presidente Constitucional. Llegaba con el respaldo de una coalición política, integrada por el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), Unión Cívica Solidaridad (UCS) y Conciencia de Patria (CONDEPA), que, sumada a la Acción Democrática Nacionalista (ADN), le aseguraba cómoda mayoría de dos tercios en cada una de las Cámaras. En el entusiasmo del momento pasó por alto que su propia votación era la más baja de sus cuatro o cinco competencias electorales. No advirtió, tampoco, que la que sería conocida como la *mega-coalición* no estaba unida por un proyecto político sino por consideraciones mucho más mundanas.

Tuvo un aceptable primer año y medio de mandato. Consciente del déficit democrático de su hoja de servicio público, convocó al Diálogo Nacional, en un ejercicio de aproximación a la sociedad civil que tuvo importante repercusión.

Era evidente, ya en aquel momento, que había que pasar del acuerdo político al acuerdo social, para superar la vieja práctica que dejaba el destino del país en manos del Estado y mercado –del Gobierno y los empresarios–. Fallido el experimento de los diputados uninominales, teóricamente elegidos por los votantes antes que por las cúpulas partidarias, había que buscar otro camino para reconectar el Estado con la sociedad. Uno que diera un rodeo al sistema partidario. Para eso era preciso incorporar en la mesa a la sociedad –el tercer gran actor.

Las Conclusiones de las Mesas de Diálogo procuraron recoger las opiniones de las instituciones, organizaciones y personalidades participantes, con la mayor fidelidad posible. De manera un tanto primaria y dispersa, reflejaron el punto de vista de los bolivianos sobre los grandes problemas de su desarrollo económico, político y social. La organización y moderación del Diálogo se encomendó a un grupo de personalidades independientes. El Gobierno se li-

mitó a propiciarlo y a gestionar recursos de cooperación técnica para cubrir los gastos de organización del evento.

Al promediar el segundo semestre del año 1998 se empezaron a sentir los primeros efectos de la crisis financiera asiática y brasileña. El Gobierno, que esperaba para entonces una tasa de crecimiento del siete por ciento, no calculó bien la magnitud del problema y no preparó al país para el período de vacas flacas que se avecinaba. Quiso creer que se trataba de una turbulencia pasajera, de una desaceleración temporal. El precio de los carburantes aumentó, desde fines del 99. El éxito de los programas de erradicación y de moralización de la Aduana afectó severamente la economía informal, por la reducción de los ingresos ilegales de la producción de hoja y la contracción del contrabando. El Banco Santander Central Hispano resolvió reducir su exposición en los mercados latinoamericanos, disminuyó la cartera del Banco Santa Cruz y frenó bruscamente el desarrollo del sector agrícola moderno. La situación se tornó intolerable.

Lejos de Bolivia, en Londres, la policía ejecutó la orden de detención de Augusto Pinochet, expedida por el juez español Garzón. La noticia tuvo un efecto devastador en el ánimo de Bánzer. Se refugió nuevamente en el círculo de la vieja guardia autoritaria de su Partido. Confirmó sus temores y aumentó la paranoia de su familia, cuando un Juez argentino, Canicoba, tramitó un pedido de extradición en un juicio criminal por la desaparición de una refugiada, durante el gobierno militar que presidió en la década de los setenta. Toleró la corrupción, en el círculo íntimo del entorno palaciego. El ejemplo cundió en todos los niveles de la administración pública. Los titulares de la prensa registraban los casos. Venta dolosa de chatarra y equipamiento de un dormitorio en la Prefectura. La compra de un avión presidencial, con sobreprecio, utilizando recursos destinados a la población de Totorá, afectada por un terremoto. El sobrenombre del Alalde, *Chaza*, se hizo tristemente famoso en el Municipio de La Paz.

La oposición de izquierda, financiada discretamente por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), aumentó la presión sobre el viejo ex-dictador.

En ese cuadro de crisis económica, debilidad política, descomposición moral y hastío de la opinión pública estalló en Cochabamba, en abril de 2000, la que se conocería más tarde como la guerra del agua.

Se trató de imponer un contrato para la ejecución del proyecto de Masicuni, con el consorcio Aguas del Tunari, como si hubiera prisa para beneficiar los intereses de grupos económicos vinculados a los partidos de la megacoalición.

Se movilizaron diversos sectores de la opinión pública local y convocaron a un exitoso paro cívico. La Iglesia medió para el diálogo, se reunieron las partes y el gobierno decidió apresarse a los dirigentes cívicos en el propio despacho de la autoridad prefectural. Al día siguiente, el Ejército intentó controlar la multitud que tomó las calles, con medidas de represión que dejaron varios muertos. El Ministro de Gobierno tuvo que huir de Cochabamba, precipitadamente.

Más tarde, en noviembre, Felipe Quispe, el *Mallku*, ordenó el bloqueo campesino de todas las rutas del altiplano paceño y convocó a los viejos fantasmas de los cercos indígenas de La Paz, de mediados del siglo XVIII y comienzos del XX. Una pequeña población, Achacachi, de menos de veinte mil habitantes, provocó pánico en la capital de la República, de más de un millón de almas, por más de quince días. El mismo día que el Gobierno decretó Estado de Sitio, una unidad de élite de la Policía de La Paz se amotinó, como un sindicato, demandando la atención de reivindicaciones laborales. El Ejército rodeó el cuartel del Grupo Especial de Seguridad (GES) y el enfrentamiento armado entre las dos instituciones encargadas de la seguridad públicas se evitó en el último minuto.

Fracasaron las medidas que se adoptaron en ambos casos y el Gobierno tuvo que ceder en todos los puntos y levantar las medidas de emergencia. Los partidos del sistema ni provocaron ni controlaron el conflicto. Las negociaciones para resolverlo ignoraron el Congreso. Se anuló el contrato con el consorcio Aguas del Tunari. Se aceptaron las demandas de las organizaciones indígenas del altiplano. Una derrota en toda la línea.

La sociedad se rebeló. Perdió el respeto a los políticos. Los despreció abiertamente. El modelo económico quedó desportillado. Perdió legitimidad. La inversión, nacional y extranjera, se retrajo en espera de ver que lo que pasaría. El *New York Times* incluyó otra vez a Bolivia en la zona tumultuosa de los Andes, junto a Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú. El país volvió al grupo del que había salido con tanto esfuerzo. El Gobierno quedó severamente debilitado. Sin autoridad. Las peleas dentro de ADN estaban pintadas en todas las paredes de todas las ciudades, mientras los candidatos de los partidos de la coalición y de la oposición salían a una campaña prematura, demagógica y suicida.

El conflicto político se alimentó de dos percepciones erróneas. Para la oposición y para el MNR en particular, el Gobierno preparaba un fraude electoral para favorecer al candidato del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Para el Gobierno, en cambio, el MNR y la oposición se habían propuesto derrocar al Presidente Bánzer. La verdad es que ni el Gobierno ni el MNR podrían alcanzar esos objetivos, en el supuesto de que se los hubieran propuesto.

Caminando por cuerdas separadas, ninguno de los dos movimientos era por sí mismo una amenaza inmediata y grave a la institucionalidad democrática. El uno, el social, anárquico, sin objetivos, consumado en el acto de protesta. El otro, el político, sectario, limitado a objetivos tácticos y electorales, encerrado en el círculo de sus propios problemas, cercado por la indiferencia ciudadana.

Sin embargo, en el cruce de las dos líneas de conflicto, crecía la crisis económica. Las movilizaciones sociales consumieron recursos escasos, redujeron la producción y aumentaron el gasto improductivo. La confrontación partidaria deslegitimó el sistema político y aumentó la incertidumbre electoral. El punto lógico de ruptura de ese círculo vicioso era un acuerdo político. Las gestiones confidenciales que Bánzer trató de llevar adelante en febrero del 2000 se frustraron con el pedido de renuncia que Sánchez de Lozada formuló cuando el Presidente se encontraba en Québec, en la Cumbre de la Organización de Estados Americanos.

El planteamiento no prosperó y, pasada la tormenta que provocó, los pronunciamientos de las organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional no dejaron dudas sobre la imposibilidad práctica de quebrar el sistema democrático. Sin embargo, el escenario que quedó fue el de estancamiento y pérdida de confianza. Todos perdieron la batalla. El Gobierno sobrevivió y en ese sentido era el que más razones tuvo para sentirse victorioso. Pero nada más, porque los problemas siguieron siendo los mismos y la perspectiva más oscura.

La Iglesia retomó las gestiones y se firmó el Acta de Entendimiento, que puso punto final a la confrontación.

En ese punto se encontraban las cosas cuando el Presidente Bánzer anunció que viajaba a Estados Unidos para atenderse de un cáncer avanzado al pulmón. Desde el Ward 72 del Hospital Walter Reed anunció más tarde que renunciaría a su mandato y que presentaría formalmente el pedido al Congreso Nacional el 6 de agosto de ese año. Hasta allí llegó, cayado en mano, sostenido apenas por su voluntad, para cumplir con el rito republicano. El 7 de agosto recibió sus últimos honores militares en Santa Cruz y se recluyó en su casa para esperar la muerte.

Jorge Quiroga Ramírez recibió los símbolos del poder a sus 41 años y, en los doce meses siguientes, quedó la sensación de que se abría camino una nueva generación política, como si alguien hubiera abierto una ventana.

La transmisión de mando marcó una excepcional jornada democrática. Pacífica, ordenada, sin una voz disonante. Al comenzar su mandato se confirmó la

existencia de inmensas reservas de gas natural en el sur del país y las más importantes transnacionales del sector anunciaron su intención de invertir más de seis mil millones de dólares para vender el producto en el mercado de California. El tendido del gasoducto dejaba en manos del Estado una carta nueva de negociación para afirmar la gravitación económica de Bolivia en el Océano Pacífico y para avanzar en la dirección del objetivo nacional de reintegración marítima soberana. Las proyecciones indicaban que las exportaciones nacionales se duplicarían en menos de una década y que los ingresos bolivianos se multiplicarían por tres en ese período.

Quiroga marcó como una de sus prioridades atender el clamor que reclamaba la institucionalización del aparato estatal, para liberarlo de la codicia de los partidos políticos. Aplicó de inmediato la Ley del Diálogo para transferir a los municipios la definición de las prioridades y la gestión de los recursos de la lucha de la pobreza, liberados por la condonación de la deuda externa. Planteó la necesidad de una nueva reforma constitucional que ensanchara la puerta de la participación social en el proceso político y constituyó una comisión plural que la estudiara y proyectara.

Por un minuto, sostenido en el tiempo, pareció que las cosas podían cambiar.

Hasta que comenzó el proceso electoral y las viejas voces de la intolerancia partidaria volvieron a dominar el escenario. Con cálculo mezquino pidieron que el Presidente Quiroga dejara para otros la definición del proyecto de gas a los Estados Unidos y sobre todo la selección del puerto por el que se transportaría. Con irresponsable demagogia provinciana bloquearon la reforma constitucional.

Y con esas voces se cerró la ventana de aire fresco. Retornaron la incertidumbre y las sombras de los últimos días de la gestión del Presidente Bánzer.

Gonzalo Sánchez de Lozada asumió el mando, sin mandato. En la casa del Embajador americano se impuso al MNR y al MIR la condición de que gobernara en alianza con su peor enemigo. Desde entonces Jaime Paz despierta en las noches, bañado en sudor frío, para recordar que no es una pesadilla, que hizo Presidente a Sánchez de Lozada y que tiene que sostenerlo en el poder. Por cierto, la nueva coalición se sostiene por una cínica coincidencia de intereses personales de corto plazo, más bien referidas al uso del Presupuesto del Estado que a objetivos políticos nacionales. En dos días, miércoles 12 y jueves 13 de febrero del 2003, la ciudad de La Paz se tiñó de vergüenza y sangre. 34 muertos y más de 200 heridos fueron el resultado de esas jornadas, signadas por el ataque contra el Palacio de Gobierno, la Vicepresidencia, el

Ministerio de Trabajo, varios Bancos, la Alcaldía de El Alto, Burger King, Coca Cola, las sedes de los partidos gubernamentales (que no fueron capaces de defenderlos), organizados por grupos de jóvenes radicalizados de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), de la Universidad Privada de El Alto (UPEA), de Barricada Roja y de fracciones trotskistas, que culminaron con el saqueo de la Aduana, el Shopping Norte, Ismar y varios negocios en el centro mercantil de las calles Comercio, Sagárnaga 16 de Julio y Murillo, por delinquentes comunes. Los primeros fueron objetivos políticos (“apedrear y quemaron los iconos el poder económico y político boliviano”, en la opinión del dirigente del magisterio, Estanislao Aliaga), los segundos una consecuencia de la total falta de protección policial.

Todo comenzó con el anuncio de un proyecto de ley que aumentaba los impuestos a la renta personal, presentado como absolutamente necesario para equilibrar el déficit fiscal y evitar el colapso económico.

La oposición y la Central Obrera Bolivia anunciaron movilizaciones para que esa medida se rechace en el Parlamento. La situación se complicó en extremo por el amotinamiento y desconocimiento de la autoridad del Presidente de la República en las guarniciones policiales de todo el país. El Gobierno desplazó unidades de las Fuerzas Armadas a la Plaza Murillo, para proteger el Palacio de Gobierno, apedreado por estudiantes de un Colegio cercano y habilitó el escenario del drama. Ejército y Policía decidieron saldar cuentas de una antigua pendencia institucional y se enfrentaron a tiros en el centro histórico del poder.

El Presidente dejó el Palacio de Gobierno y guardó silencio. Por largas 36 horas hubo ausencia de liderazgo y dirección en la conducción del Estado, simbolizado en el abandono temporal del centro de comando por las principales autoridades nacionales. La ciudad quedó a merced de pandillas de delincuentes y activistas. El Gobierno anunció el retiro puro y simple del proyecto y aceptó todas las condiciones de la Policía insubordinada.

Esos hechos se pueden resumir en una frase: vacío de poder. El Gobierno perdió legitimidad, autoridad y base de sustentación social y política. Solo se sostuvo por la falta de alternativa democrática real.

Los acontecimientos de esa semana pueden verse como parte del proceso de agitación social en el Continente y como una nueva etapa de movilización de la oposición de izquierda en Bolivia, que comenzó en abril y septiembre del 2000. Como entonces, esa rebeldía se alimentaba en una crisis económica que ya llevaba más de cuatro años, en el desprestigio de los partidos políticos por

su corrupción y prebendalismo y en la brecha creciente entre sociedad y sistema político. Se sostuvo con el apoyo logístico, financiero e ideológico de Organizaciones No Gubernamentales internacionales, agrupadas en el movimiento antiglobalizador mundial.

Todos estos factores ya se pusieron de manifiesto en las elecciones de julio de 2002 y explicaron en buena medida el desempeño electoral del Movimiento al Socialismo (MAS). Eclósión de la intolerancia y resentimiento político, étnico y regional, salieron nuevamente a la superficie y, otra vez, fueron exacerbados por un manejo político oficialista, incompetente y arrogante.

La convulsión social, caracterizada por marchas, amenazas de bloqueo y huelgas, era producto del cansancio de la población por una prolongada y agotadora crisis económica, cuyo origen no está en factores externos sino la ineficiencia y corrupción del Gobierno, en el juicio, equivocado pero prevaleciente, de los medios y la opinión pública.

El movimiento social, alentado por las organizaciones internacionales contra la globalización, tenía esta vez fuerte presencia parlamentaria y, en el MAS, un instrumento político. Pero era todavía un movimiento desordenado y complejo, sin proyecto común, que reunía reivindicaciones diversas y contradictorias, de carácter cultural, económico, salarial, regional y étnico.

El llamado “Estado Mayor del Pueblo”, reunido en Cochabamba, diez días después, para evaluar la situación, concluyó que “la sublevación social fue espontánea” y que sus cuadros políticos no estuvieron a la altura de los acontecimientos, ya que ni las organizaciones a su mando ni la Central Obrera Boliviana (COB) coordinaron acciones para dirigir este movimiento.

En cambio, la versión ofrecida por el Gobierno y que tuvo eco en algunos comentaristas insistía en que la explosión social no fue espontánea. En realidad estaba programada –por la convergencia coyuntural del MAS, el NFR, grupos contestatarios de la sociedad civil y sectores de las Fuerzas Armadas y Policía– para el momento en el que se anunciara el proyecto de exportación de gas y la selección de un puerto chileno. Ese levantamiento –en el que el bloqueo de caminos fue apenas una primera fase de preparación– se adelantó por el “impuestazo”.

En la lógica política del MAS y del Estado Mayor del Pueblo (hay otra insurreccional y revolucionaria en el mismo movimiento), esa movilización y levantamiento social, antes que provocar un golpe de estado tradicional, debilitaría y descalificaría el Gobierno, aumentaría la presión para la renuncia del

Presidente y crearía las condiciones para una aplastante victoria en las elecciones municipales (esperan ganar 200 municipios) o en elecciones nacionales anticipadas. Repetiría en Bolivia el esquema que dio buen resultado en el Ecuador.

La primera víctima de la confrontación fue, desde luego, al Gobierno. Mostró fisuras internas, incapacidad y lentitud en la administración posterior del conflicto. Dañado el liderato ético, político y práctico, su capacidad para dirigir el país quedó severamente afectada, en el preciso momento en que nuevas señales de incertidumbre aparecían en el escenario económico y político mundial y regional.

En ese contexto, era evidente que el Gobierno ya no tenía fuerza para aplicar las medidas de ajuste necesarias para restablecer el equilibrio macroeconómico y mucho menos las que habrían de requerirse para enfrentar los problemas estructurales, como el proyecto de Liquefied Natural Gas (LNG), los temas de tierra y agua y la reorganización de la Policía Nacional, para mencionar algunos ejemplos. *The Economist* escribió: "Sánchez de Lozada puede haber salvado su Presidencia, pero ya no sería capaz de salvar la economía del país". Tendría que limitarse, como tantos otros en la historia boliviana, a la administración de la crisis. En esa medida, aumentaría la inseguridad y la incertidumbre y se reduciría la inversión privada, nacional y extranjera. Y crecería la agitación social, en el *corsi* y *ricorsi* de un viejo y conocido círculo vicioso.

El MAS, por cierto, era parte de ese cuadro,. Equivocó el cálculo. Desencadenó un proceso que luego no pudo mantener bajo control. Procedió de manera equivocada y agresiva con el bloqueo de caminos y, más tarde, en febrero, con el vandalismo delictivo y político. Radicalizó sus planteamientos y, con el pedido de renuncia del Presidente, se puso en el borde del sistema constitucional y pretendió más de lo que podía conseguir. En su estructura de mando predominó la lógica del pliego petitorio sindical sobre la del análisis político del riesgo calculado. Cuando se anunció el proyecto de ley del *impuestazo* el MAS procuró ampliar la base social del rechazo y por eso buscó un entendimiento con la Confederación de Empresarios Privados, pero ya era tarde y la gente estaba en la calle, quemando edificios y asaltando la propiedad privada. Asustó a las ciudades, afectó los intereses de la clase media y de los sectores populares urbanos y, en esa medida, dañó los puentes de comunicación que requería para salir de su santuario cocalero.

Si el Gobierno fue incapaz en la administración del conflicto, el MAS fue culpable de provocarlo. Acusó el golpe porque comenzó a cambiar su conducta. En lugar de presionar con un nuevo ciclo inmediato de bloqueos y movilizaciones

ciones, aprovechando la clara debilidad del Gobierno y los roces entre Ejército y Policía, se replegó “para evaluar la situación y la estrategia”. Por otro lado, anunció que iniciaría Juicio de Responsabilidades al Presidente de la República, en el marco constitucional, en el Congreso, lo que en la práctica implica abandonar el planteamiento político e insurreccional del pedido de renuncia.

Hay otro sector dentro de ese movimiento que tiene una lectura diferente, sin embargo. Asume que el capitalismo boliviano está en bancarota y que la “espontánea sublevación se estrelló contra 17 años de opresión (los del ciclo democrático). El neoliberalismo murió y las políticas impuestas por el FMI fracasaron” en el balance de Osear Olivera. En su razonamiento, “la tropa policial apoyada por oficiales progresistas derrotó el impuestazo y puso en jaque al Ejército”. El corolario de este análisis era, desde luego, que se estaban reuniendo “las condiciones objetivas y subjetivas” del cambio revolucionario. En el otro lado de la vereda, como contraparte, está la lógica de los sectores conservadores (principalmente empresarios pero con muchos seguidores en las ciudades, especialmente en Santa Cruz) que afirman que ha llegado el momento de sentar la mano, otra vez, a los agitadores.

Se superó la fase aguda de la crisis, por el momento, pero no se resolvió ninguno de los problemas que la originaron.

Estados Unidos, varios países europeos y el Fondo Monetario también recibieron el mensaje y resolvieron flexibilizar su posición, respecto de sus exigencias sobre la reducción del déficit. Pero, aún así, con esa ayuda, era muy escaso el margen que el fisco disponía para atender los pedidos de Universidades, maestros y regiones. De manera que, aunque se haya alejado el fantasma de medidas traumáticas, era claro se mantendría el clima de agitación y violencia.

Probablemente esa es la dificultad menor, aunque fue la que desató la crisis. El problema más serio es político. Es la pérdida de credibilidad y autoridad del Gobierno y de los Partidos que lo sustentan. El procedimiento empleado para renovar el Gabinete, recurriendo otra vez al cuoteo, que mostró nuevamente la pugna de facciones internas en los principales partidos para tomar posiciones y *pegas*, no ha hecho otra cosa que aumentar las dudas de la ciudadanía. Y la presencia disminuida, pero constante, de UCS sirve para mostrar el precio ético que la coalición tiene que pagar para mantener una frágil mayoría parlamentaria.

Se dispuso, por el momento, la amenaza insurreccional, que aparecía como una opción, con un gobierno ausente y la gente sin ningún control en las calles. Se ha postergado la renuncia del Presidente como medio para resolver la crisis

dentro del marco constitucional, aunque la Nueva Fuerza Republicana (NFR) y el MAS insistan todavía en el planteo y es probable que vuelvan a la carga en el futuro.

El genio que el mismo Sánchez de Lozada sacó de la botella cuando solicitó la dimisión del Presidente Bánzer todavía seguirá dando vueltas.

Esa parece ser la perspectiva. Inestabilidad política, estancamiento económico, agitación social.

UNO

En todos los casos que han sido mencionados en este papel, la crisis económica es el detonante de la contienda social y la crisis política. La recesión gatilla, activa el conflicto latente.

Así ocurrió antes, a principios de la década de los ochenta. Entonces, las dificultades para atender el servicio de la deuda externa, el desplome de los precios de las materias primas, la hiperinflación y la caída abrupta de los índices de crecimiento, aceleraron el fin de los regímenes autoritarios en el Sur.

En el decenio de los noventa, la contracción de flujos financieros internacionales y un nuevo descenso del valor de las exportaciones de productos básicos, trajeron de vuelta los tormentos de la depresión económica. Y esta vez fue el turno de las estructuras democráticas regionales. A ellas les tocó lidiar con la ola de descontento y agitación popular que se ha mencionado, con las consecuencias que se han descrito y las que todavía están por venir.

La influencia directa de los factores económicos en el comportamiento político, se puede advertir claramente en el efecto del alza de precios de hidrocarburos en Ecuador. Ese Gobierno recuperó la renta petrolera y logró contener el deterioro de su tejido social y de su estructura económica y política. Pero su equilibrio es precario y volverán los tiempos de vacas flacas cuando los precios caigan de su pedestal. Como tantas otras veces.

Al paso que van las cosas, se podrá hablar de crisis permanente, porque en el momento en que parece que se sale de una, en realidad se asoma el umbral de la siguiente. La que hoy se vive, comenzó en 1998, con los problemas de Brasil, el Sudeste asiático y Rusia, y se reactiva con las gravísimas dificultades de Argentina al comenzar el 2001. Tienen rasgos comunes y nombres diferentes, asignados con una fuerte dosis de ironía. Se habla así del efecto tequila, samba, tango, como si ésta fuera una fiesta, una larga e interminable fiesta. Estas crisis se relacionan de manera directa con la internacionalización y el creci-

miento exponencial de los flujos financieros, manifestación principal del proceso de globalización. Su enorme expansión se explica por el cambio tecnológico –que permite trasladar dinero en tiempo real a cualquier lugar del planeta con un *click* del *mouse*– y sobre todo por la desregulación y liberalización de los sistemas financieros, promovida a rajatabla por los Estados Unidos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En la medida en que se eliminaban los antiguos sistemas de control de divisas, creció exponencialmente la cantidad de dinero dispuesto, animado y capaz de movilizarse alrededor del mundo, ya sea por codicia o por miedo. Aumentó entonces el número de países en desarrollo que lograron acceso al mercado mundial de dinero. Para que eso ocurriera fue necesario encontrar un apelativo más atractivo que el de países recientemente industrializados. Así se acuñó la expresión de mercados emergentes.

Por ese procedimiento, se alteró substantivamente la composición de los flujos de financiamiento del desarrollo de los países emergentes. Las líneas de asistencia oficial para el desarrollo, bilateral y multilateral, que en la década de los setenta explicaban tres cuartas partes de esos flujos, cedieron su lugar a las corrientes privadas de dinero, originadas en los mercados de capital. En 1996, el 99% de los flujos a los 29 mercados emergentes más importantes tenían ese origen.

De pronto, se pincharon las burbujas especulativas, el dinero salió de los mercados emergentes, quedaron detrás economías destruidas y una crisis financiera global y recién entonces los “expertos” se percataron que los mercados financieros de los países en desarrollo –abiertos por su imposición– no estaban en realidad preparados para recibir y digerir esos flujos de capital.

Así quedó, expuesta, la fragilidad de los sistemas financieros de los países en desarrollo, dependientes de financiamiento de corto plazo, peligrosamente volátil y voluble. Los datos lo confirman, para que no quede lugar a dudas. El Financial Times del 4 de mayo de 1998, informaba que los recursos de los bancos en los 29 mayores mercados emergentes, se habían desplomado de 120 billones a -29 billones entre 1996 y 1998 y que los flujos totales de capital disminuyeron de 332 billones a 196 en ese periodo. Martin Wolf anota en el Financial Times (21.01.03) que los flujos externos de financiamiento, que llegaron a representar el 5% del PIB regional en 1998 se han estancado ahora en una cifra equivalente al 1%.

En cifras de la Comisión Andina de Fomento (CAF), los flujos de capitales externos hacia América Latina, que en promedio habían llegado a US\$ 56.2 miles de millones anuales en el periodo 1990-1997, cayeron a un promedio

anual de US\$ 37.2 miles de millones en el periodo 1998-2000 y se estima que para el año 2002 sean inferiores a US\$ 20 mil millones. Además de esta severa contracción, los *spreads* de la deuda externa de la región han pasado de cerca de un promedio de 400 puntos básicos sobre bonos del Tesoro norteamericano a finales de 1991 a más de 900 puntos básicos en el 2002.

En toda la región andina (y en América Latina), privadas de capital de trabajo, las empresas dejaron de producir y de pagar sus deudas. Cayó el ahorro y se redujeron las captaciones bancarias. La cartera de los bancos se deterioró rápidamente y se contrajo bruscamente la liquidez. Rota la cadena de pagos, su efecto se transmitió a la economía real. Se deprimió la demanda, aumentó la desocupación, los costos financieros crecieron exponencialmente, cayó la tasa de crecimiento y se entró en recesión.

Con desempleo creciente, los Gobiernos se vieron obligados a la aplicación de medidas proteccionistas o a devaluaciones masivas para cuidar o para mejorar la competitividad de su estructura productiva. De esa forma, se desencadenaron fricciones comerciales severas que estancaron los proyectos regionales de integración y que amenazan seriamente su existencia.

Todos sabían que la crisis argentina era una cuestión de tiempo. Pero se aferraban a la ilusión de su retraso. Llegó, sin embargo, cuando menos se la quería. En el momento en que algunos indicadores apuntaban a una lenta recuperación de la economía regional. El diagnóstico era frío y claro. La deuda argentina llegó a niveles insostenibles (423% de las exportaciones anuales), porque su economía dejó de crecer desde 1998. La convertibilidad con un dólar fuerte reducía la competitividad internacional de sus exportaciones. La obvia desconfianza de los mercados de capital exigía altas tasas de interés. Finalmente, exhausta, sin reservas monetarias y anímicas, Argentina devaluó, dejó la convertibilidad y entró en moratoria de la deuda extena. Desesperada, no se limitó a declarar feriado bancario para evitar la corrida de depósitos, sino que los congeló, pura y simplemente. Quedó fuera del sistema financiero internacional, librada a sus propias fuerzas. La reacción popular, expresada en inmensas manifestaciones espontáneas, que salieron como hongos en todas las ciudades argentinas, provocó la renuncia del Presidente. Durante unas interminables 24 horas, en diciembre de 2001, Argentina no tuvo ningún Gobierno. En las siguientes semanas, un Presidente sucedió a otro, hasta que, finalmente, se logró un entendimiento en el Congreso para establecer un Gobierno de transición. Pero las cifras reflejan la gravedad de las consecuencias. En el año 2002 el producto por habitante cayó en 12% (la suma del cuatrienio llega al -22,4%!!). Los índices de pobreza urbana se sitúan en el rango del 58%.

DOS

No son sólo los vientos de fronda de la globalización y del cambio tecnológico o de la crisis económica los que explican la extraordinaria fluidez política de las naciones andinas. Hay otras fuerzas, que se mueven en las capas profundas de esas sociedades, que reclaman su sitio en el escenario.

La exclusión sistemática de una parte substantiva de la población, cuyo antecedente más remoto se puede situar en la Conquista y que no se ha corregido todavía, es una de las principales causas de la inestabilidad política andina.

Hagamos un poco de historia reciente, para entender mejor las raíces del problema.

A lo largo de la década de los sesenta, bajo el alero de la Alianza para el Progreso, para resistir los embates de la Revolución Cubana, integrar a los indígenas a la economía de mercado y mejorar la productividad agrícola, distintos gobiernos reformistas de los países andinos (Eduardo Frei Montalva en Chile, Lleras Restrepo en Colombia, Juan Velasco Alvarado en Perú, el Gral. Rodríguez en Ecuador) promovieron reformas agrarias, en la estela de las que habían hecho antes México y Bolivia, en la idea que podían evitar los errores económicos de esas experiencias y sustituir el orden oligárquico, a un costo razonable.

Esta vez, sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en esos dos países, la resistencia organizada de los latifundistas, aliados con los empresarios urbanos y los sectores políticos conservadores (y en Chile y Colombia, con los militares), contuvo primero y revirtió después la reforma agraria. La sociedad se polarizó y del otro lado se agruparon las clases medias urbanas, profesionales, intelectuales, periodistas, dirigentes sindicales.

La proyección de los actores e intereses de la Guerra Fría radicalizó el conflicto. Los sectores fundamentalistas de los grupos contendientes utilizaron el financiamiento y el apoyo logístico de Estados Unidos y la Unión Soviética, para fortalecer sus posiciones, mejorar sus líneas de aprovisionamiento y no tuvieron inconvenientes para acomodar su lenguaje y su *praxis* a la ideología y a las consignas de sus patrocinadores externos. Allí nacieron las FARC, Sendero Luminoso, el ELN... y Pinochet.

El centro reformista y democrático, estrujado en el choque, salió del escenario. Hasta que terminó la guerra fría.

Se desvaneció pronto la especie de que los conflictos sociales y políticos de la región, consecuencia para unos de la agitación comunista y para otros de la

explotación capitalista, desaparecerían tan pronto esa tensión concluyera, con la derrota de uno de los campos. A fines de los ochenta, en el colapso de la Unión Soviética, pareció que ese momento había llegado. Uno de los bandos festejó lo que entendía era su victoria definitiva, mientras el otro parecía desconcertado y sin brújula. Una década después, ambos han vuelto a la escena, con otros aliados, otro mensaje ideológico, otros medios.

En Chile la antigua oligarquía se las arregló para reconstruir su posición económica y política. En los otros países emigró a las ciudades, cansada de la presión y los problemas y atraída por los nuevos negocios financieros y de servicios. En Colombia los narcotraficantes, deseosos de establecerse socialmente, ocuparon su lugar. Pero en ninguno las cosas volvieron a ser como habían sido.

En la guerrilla de las FARC, en el terrorismo de Sendero Luminoso, en las movilizaciones indígenas del Ecuador y en el levantamiento aymara del *Mallku*, hay un factor común, un hecho que se repite. Es la diferencia abismal de ingresos y de oportunidades entre la población campesina —generalmente indígena— y la urbana. Todos los informes de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas afirman, además, que esa brecha no se ha reducido con el avance técnico y el impulso de la integración global de la economía. Por el contrario. Ha crecido y se ha hecho más ostensible.

En el mundo andino, vivir en las zonas rurales equivale a vivir en la miseria. Para citar un ejemplo, en Bolivia, el 95% de la población sobrevive por debajo de la línea de pobreza extrema. Si se repara que hace cincuenta años ese porcentaje llegaba al 98%, se comprobará que nada ha cambiado la condición de vida del indígena. Por lo visto, no sirvieron para nada ni la Reforma Agraria, ni el Voto Universal, ni la liberación de precios agrícolas, ni la revolución verde, ni la protección del mercado. Nada.

La única solución era —y es— huir a la ciudad. O, hasta poco, a las zonas coca-leras. El resultado son cientos de pueblos fantasmas. Nombres en los mapas. Entre la miseria, la informalidad o la delincuencia, esa gente sólo tiene ante sí el camino del levantamiento suicida, de la provocación sin esperanza. Una actitud de rebeldía casi testimonial que, sin embargo, toma carácter sangriento cuando encuentra fuentes de financiamiento, como ocurrió con el narcotráfico en Ecuador y Perú.

En algún trabajo anterior anotaba que, ante el temor de lo que trae el futuro y la imposibilidad de encarar el presente, los movimientos indígenas están buscando refugio en el pasado. Llevan como estandarte mitos, imágenes, formas

de organización social y hasta métodos de producción que parecían pertenecer al pasado, aunque en la práctica utilizan en la lucha todos los medios de la tecnología contemporánea y el apoyo de una red mundial de organizaciones no gubernamentales. Como están desesperados están dispuestos a cualquier cosa. A la demanda tradicional de tierra se suma ahora el reclamo de identidad cultural y de autonomía política. El problema agrícola y campesino toma la forma de problema étnico. Inclusive en México y Bolivia.

En varios de los países andinos ésa es la expresión dominante de la movilización de la sociedad civil. Pero no es la única. A las etnias se suman la iglesia, las ONGs (de mujeres, ecologistas) y, sobre todo, los medios de comunicación, para conformar un nuevo núcleo de actores no estatales. Desde fuera, desde mas allá de las fronteras, las empresas multinacionales, los organismos internacionales y las ONGs de los países ricos, influyen de manera determinante en el comportamiento de las sociedades andinas, con sus ideas, sus intereses o sus recursos.

Así, de esa manera, la sociedad civil ocupa el antiguo espacio de los sindicatos obreros y reclama un lugar entre el Estado y el mercado (o los empresarios). La sociedad civil no existió, por definición, en la dictadura. Es hija de la democracia, de la descentralización, de la libertad. Sin embargo, la sociedad andina, como la latinoamericana, desencantada de los políticos, desilusionada del Estado, influida por los medios de comunicación de masas, financiada por ONGs de países ricos, asumió que su situación cambiará solo en la medida en que participe y actúe directamente, por su propia cuenta, sin la intermediación de los partidos políticos. El resultado es la exaltación del interés particular o de grupo sobre el de la nación.

Eso es lo que distingue a la moderna versión de los movimientos populares de los que protagonizaron las revoluciones nacionales desde la década de los años treinta. Aquellos planteaban la alianza de clases para enfrentar el enemigo externo. Se proponían la creación del mercado y del Estado nacional. Afirmaban el uso de un solo idioma y la construcción de una cultura y un tipo humano, mestizos, fruto de todas las sangres.

En cambio, por lo menos en esta etapa augural de otro tiempo histórico, las nuevas organizaciones reclaman el reconocimiento de la diversidad de la etnia, de la cultura y del idioma. La solución de lo concreto. La prioridad de lo inmediato. Afirmar el predominio de lo excluyente. No tienen ni parecen buscar banderas comunes, salvo alianzas ocasionales, tácticas. Así, en ese camino, la representación social se atomiza y la lucha aparenta no conducir a ninguna parte. Así suelen ser las cosas en el momento del cambio, como si en el principio fuera

el caos. Pero el flujo desordenado terminará organizándose cuando los partidos reencuentren el contacto con la sociedad o, mejor dicho, cuando la sociedad estructure los partidos que representen sus intereses. Pero ese es otro tema.

TRES

La lucha de fuerzas, tendencias, tradiciones e intereses, locales y nacionales que se ha relatado, toma una dimensión distinta y traumática en el umbral de un nuevo tiempo, en medio del proceso planetario de transformación del sistema económico y político, en el que la ausencia de puntos de referencia o paradigmas reconocidos aumenta la confusión y la incertidumbre..

Las sociedades y sistemas políticos de los países andinos, como se ha podido observar, resistieron, asimilaron o asumieron de manera diferente el paso de una estructura a otra. Pero, en todos los casos –antes, durante o después– la globalización figuró en el corazón mismo de la controversia y el conflicto social y político regional.

Los contendientes se alinearon claramente de uno y otro lado. Unos empujando y otros resistiendo la apertura del mercado, la liberalización de los flujos financieros, la reducción del gasto público y, sobre todo, la privatización de las empresas del Estado, en la medida en que cada una de esas medidas modificaba no sólo la armazón económica sino que alteraba, en la raíz, la estructura del sistema político. En esa dimensión, la confrontación no se redujo al debate de principios o recetas técnicas, sino que configuró el escenario de una auténtica lucha por el poder.

Pero su característica central –su tendencia a la concentración de la riqueza– no admite dudas. Tanto que voy a tomar una cita de Kissinger para describirla. Dice: “La brecha entre los mundos económico y político es el talón de Aquiles del proceso de globalización. La globalización acarrea el riesgo de que la economía de los países en desarrollo funcione en dos pistas diferentes. Tal vez el veinte por ciento de sus economías forme parte del sistema internacional, típicamente como componente de grandes multinacionales. El resto –la mayoría de la población, probablemente– puede ser dejada detrás, sin acceso al ingreso, a los empleos y las oportunidades generadas por la globalización.”...“Mas aún, no se puede esperar que el ahorro interno genere la inversión indispensable para llevar a la región a otro nivel de desarrollo. Como consecuencia, la mayoría de las inversiones productivas de Latino América terminarán, tarde o temprano, en propiedad de extranjeros”.¹

Por lo menos dos manifestaciones de ese proceso pueden destacarse en este punto. Sus implicaciones económicas. Sus alcances sociológicos.

En la crisis se confrontan dos fuerzas. De un lado, las externas, que sostienen el carácter ineluctable de la globalización y que propician la apertura, el cambio y el sometimiento a las reglas del mercado, como condiciones esenciales de una política de crecimiento. En este costado de la línea divisoria se agrupan, especialmente, los grupos exportadores nacionales, las corporaciones transnacionales y los organismos financieros internacionales. Se encuentran del otro flanco los empresarios nacionales que abastecen el mercado interno, los grupos nacionalistas y los sectores populares.

De esta forma, se reproduce una contradicción política latinoamericana, que se repitió, con variantes, a lo largo de la República, entre los que defienden la inserción regional en la economía mundial, explotando la ventaja comparativa de la posesión de materias primas, y aquellos que propugnan la creación de una estructura productiva nacional, preferiblemente industrial, sobre la base de la construcción del mercado interno. Para los primeros, nada debiera interferir la acción de las fuerzas del mercado. Para los segundos, la intervención del Estado, en formas que han ido variando con el tiempo, es indispensable para corregir las deficiencias y limitaciones del juego de la oferta y la demanda.

Por cierto, la globalización no es la misma en todas partes ni llega de la misma manera. Casi nadie escapa a las consecuencias de la revolución tecnológica, pero la capacidad de Estados, empresas y personas para adaptarse o responder al desafío es muy distinta. De esa forma, se han generado dos corrientes contradictorias, fundadas en la esperanza y el miedo.

De un lado, una tendencia global de integración económica y política y, del otro, un movimiento igualmente planetario de fragmentación regional y étnica. El mercado de bienes, servicios e ideas se torna mundial, pero las estructuras más débiles de la sociedad se repliegan en su parroquia y en sus propias tradiciones locales, culturales y políticas, para proteger su identidad y para establecer un punto de conexión con su pasado, en medio del aturdimiento del cambio. Allí, en ese escenario, la recuperación de las tradiciones endógenas es, en el fondo, una manera de defender identidades colectivas que se volvieron precarias. Se configura de esta manera una confrontación dialéctica entre las tendencias económicas y políticas de globalización y las corrientes sociales de signo conservador, que pretenden preservar la identidad de su propia cultura.

En los países andinos —en esa perspectiva— la modernización a marchas forzadas ha provocado un sentimiento de alienación. Induce una escisión en la conciencia colectiva entre la antigua armonía social, cultural y económica de la época premoderna y la pluralidad, renovada incesantemente, de acciones y valores de orientación de la edad moderna. Engendra una pugna que se mate-

rializa en la confrontación de los grupos ligados al mundo rural y campesino y a las etnias, por un lado, y las clases medias de las ciudades, empeñados en la imitación indiscriminada de las pautas culturales de la civilización moderna occidental, por otro.

Así planteada la hipótesis, hasta parece simple. De un lado las fuerzas del cambio. Del otro, las de la defensa del pasado. Pero no es tan fácil, porque también se presenta como una confrontación entre dos visiones éticas. La primera, la del capitalismo puro y duro que privilegia la eficiencia sobre la solidaridad. La segunda, la humanista que reivindica los valores de la justicia sobre los de la productividad.

Hay algo más. La confrontación entre los actores sociales ya no es sólo interna, como en el pasado. La globalización ha *transnacionalizado* el conflicto. Por eso, el levantamiento del pueblo aymara, encabezado por un líder milenarista y carismático, que enarbola banderas y tesis anacrónicas, es parte, paradójicamente, de una movilización mundial, que se reproduce en la lucha de los mapuches en Chile, de los indígenas en el Ecuador, que explica la tozuda persistencia de la guerrilla colombiana, que da sustento político a la revolución chavista en Venezuela y que explica las manifestaciones antisistema en Seattle, París, Praga, Québec, Génova, para citar algunos ejemplos. No solo comparte objetivos y principios de lucha, sino que se alimenta de su apoyo. Es decir, la defensa de los valores parroquiales se hace *global*.

Lo que esta aparente contradicción en términos pone de manifiesto es que la *globalización* no se puede evitar, ni siquiera para negarla.

La reestructuración del sistema económico internacional al término de la Guerra Fría, creó la sensación de que la disputa se había resuelto de manera definitiva a favor las corrientes aperturistas y liberales. Esa era una parte del fin de la historia. Sin embargo, en la medida en que se comprobó empíricamente el incremento exponencial de la concentración del ingreso y de la ampliación de la brecha social, el debate retornó a la mesa.

Hoy se ve con mayor claridad que lo que está en discusión no es la *mundialización* de la economía, fruto del incontenible avance tecnológico, sino su carácter. Lo que está en debate es la manera dogmática y fundamentalista con la que se trata de imponer el modelo de apertura. La imposición de la ley del más fuerte. Su inclinación insolente a la degradación del pobre y a la ampliación de la brecha social. La ausencia de mecanismos que protejan y compensen a los menos favorecidos y que impulsen a los menos preparados. Que respeten y se beneficien de la riqueza de sus raíces étnicas y de sus valores

culturales. Esos instrumentos existen, se aplican y no son incompatibles con la operación de una economía abierta de mercado. Lo demuestra la experiencia exitosa de la Unión Europea en el fomento del desarrollo de sus socios del Mediterráneo y está nuevamente presente en la negociación de las modalidades de acceso de los países de Europa Central y Oriental a esa organización. •

NOTAS

1. Does America need a foreign policy? New York. 2001.